

LOS OBSTÁCULOS DEL ANTIDESARROLLISMO

Mariano Kestelboim¹

1. Introducción	2
2. El Estado sí o sí en la economía.....	3
3. Las relaciones de fuerza y el proceso histórico.....	7
4. Utilización al máximo de las políticas públicas disponibles	10
5. Impacto en la inserción internacional de las políticas comerciales.....	11
6. Conclusiones	16
7. Bibliografía.....	18

¹ Economista. Director Ejecutivo de la Fundación Pro Tejer. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador de la Comisión de Coordinación Institucional de la graN maKro.

1. Introducción

El resultado político económico de la guerra civil en los Estados Unidos (1860-1865), representa la prueba más categórica de la importancia de la intervención estatal en la administración económica. El modelo productivo triunfante ante el esquema agro exportador, prevaleciente en el país hasta ese conflicto, reguló activamente los mercados, de modo de promover la explotación y la transformación interna de los insumos locales.

El proceso de crecimiento de la mayor potencia económica actual comenzó a través de una capacidad fabril atrasada y dependiente tecnológicamente de los países más industrializados de esa época: Gran Bretaña, Francia, la Confederación Germánica, Bélgica, los Países Bajos y Suiza. A pesar de que los medios de transporte eran mucho más limitados y costosos que hoy, el avance de su estrategia desarrollista requirió la preservación de su dinámico mercado interno de la competencia internacional. Para ello, el gobierno estadounidense aplicó, desde el inicio de la guerra civil hasta la Primera Guerra Mundial, los niveles arancelarios a la importación más elevados del planeta y fue la economía de más rápido crecimiento en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Recién cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos redujeron sustancialmente sus impuestos a las compras externas y comenzaron a predicar en el mundo por el libre cambio. (Chang, 2009).

John Keynes promovió, en 1945, la creación de una Organización Internacional del Comercio (OIT) que regulara la economía mundial para promover la equidad y el pleno empleo. Proponía que la institución fuera capaz de proveer adelantos en cuenta corriente para corregir los desequilibrios de las balanzas de pagos de los países miembros. No obstante, su impulso quedó en el camino y se creó, dos años más tarde en Bretton Woods, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organismos que distorsionaron el espíritu original, ya que se focalizaron en fomentar el libre comercio de bienes industriales e impusieron condiciones de políticas económicas a los créditos que no fueron eficaces en la promoción del desarrollo de las economías atrasadas.

La política aperturista en el mundo sólo fue promovida en los sectores donde las economías desarrolladas poseían la mayor productividad, excluyendo a las actividades agropecuarias y a las textiles (el proceso de liberalización en esta última comenzó paulatinamente medio siglo después del final de la Segunda Guerra Mundial). El mantenimiento de esa protección fue estratégica. Ambos sectores podían ser desplegados competitivamente por los países menos avanzados tecnológicamente. Además, en el caso de la producción de alimentos, la capacidad de producción es geopolíticamente determinante y el sector textil, por su parte, es fundamental para la generación de puestos de trabajo.

Ahora bien, las políticas industrialistas norteamericanas debieron llevarse a cabo, tras el conflicto bélico interno, mediante un Estado políticamente robustecido, competente y con un planeamiento estratégico claramente definido por sus gobiernos.

En sentido inverso, pero también con la violencia de las armas, sumado al respaldo de capitales financieros de los centros de poder mundiales, en la Argentina, un Estado golpeado, corrompido y dominado por fuerzas militares impuso, el 24 de marzo de 1976, un programa económico, político e institucional que degradó los cimientos de soberanía nacional logrados hasta ese momento.

La lógica antidesarrollista imperante en el funcionamiento de aquel modelo esparcido por toda América latina, tuvo dos ejes centrales: alejar al Estado de la administración de los mercados y desindustrializar progresivamente la economía del país. A diferencia de las políticas industrialistas empleadas en el caso estadounidense, la consecuencia del programa antidesarrollista empobreció a la nación. El esquema de política económica se basó en la especulación financiera y en la degradación, el vaciamiento y el remate de los activos nacionales.

En la Argentina, las políticas antidesarrollistas alcanzaron su pico máximo tolerado por la sociedad 25 años después de iniciado ese proceso, generando el estallido de la crisis más lamentable de nuestra historia en diciembre de 2001. La pobreza afectó al 55% de la población, la distribución del ingreso llegó hasta un nivel de grave inequidad (similar al de los países más desiguales de América latina, que también habían empeorado su situación en los últimos años) y cerca de la mitad de los trabajadores padecieron el desempleo o la subocupación y, en general, las condiciones laborales se precarizaron. El hundimiento no fue sólo económico, sino también moral y cultural.

2. El Estado sí o sí en la economía

“El mundo más conveniente para los gigantes multinacionales es un mundo poblado por estados enanos o sin ningún estado”
Eric Hobsbawm

Desde el rigor de los hechos, la capacidad económica y política de la intervención estatal en los mercados y sus alianzas de poder, tanto en el ámbito local como en el internacional, constituyen los factores más determinantes del modo y la profundidad de la inserción económica de una nación con el resto del mundo. Aun siendo los recursos de la naturaleza factores muy influyentes en la elección de la estrategia de crecimiento, los Estados son los encargados de planificar una matriz productiva de mayor dimensión, complejidad y diversidad, que requiera trabajadores en continua formación.

Los procesos exitosos de desarrollo han contado con políticas públicas que regularon el fortalecimiento de los mercados domésticos, núcleos de las transformaciones estructurales. La actividad productiva, basada solamente en la explotación de las riquezas terrestres, en ningún caso, ha permitido alcanzar niveles convencionalmente aceptables de desarrollo. Ella debe complementarse con complejos industriales que estimulen la generación de empleos, la distribución del ingreso y los avances de la ciencia y la tecnología, de modo de ganar autonomía en la administración de la economía y que la población mejore progresivamente sus condiciones de vida.

El profesor de la UBA, Jorge Schvarzer, enseñaba que: **“la industria es la base material de la estructura productiva sobre la que se apoya el desarrollo económico. El fenómeno es tan evidente que hoy se acostumbra denominar sociedades *industriales* a las naciones *desarrolladas*. La analogía es obvia: no hay sociedad desarrollada que no sea industrial, del mismo modo que no hay sociedad industrial que no sea desarrollada”**. (Schvarzer, 2000)

La protección del mercado interno ante la competencia internacional y el fomento por parte del Estado de las cadenas de valor es una condición necesaria para el progreso económico. El investigador de Corea del Sur², Ha-Joon Chang, que actualmente trabaja en la Universidad de Cambridge de Inglaterra, llegó a esta conclusión: **“no**

² Fue la última nación del mundo en haber alcanzado el desarrollo; ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1996.

todos los países han tenido éxito mediante protección y subvenciones, pero muy pocos sin ellas". (Chang, 2009)

Los procesos de desarrollo han demostrado que la política comercial es indispensable como mecanismo básico para fomentar la industrialización, especialmente en sus estadios iniciales. En esas fases, las economías no suelen acumular, a través de sus exportaciones primarias, las divisas suficientes para avanzar en un sendero de transformación estructural. En caso contrario, la distribución de las rentas generadas por esas actividades es extremadamente desigual. Los casos más ilustrativos de este fenómeno son los de los países petroleros del norte de África y Medio Oriente.

Por su parte, los Estados de los países no desarrollados, en general, carecen de los recursos fiscales necesarios para emplear políticas agresivas de incentivo a las grandes inversiones privadas de alto riesgo. Éstas escasean dado que las primeras fases de crecimiento no suelen ser estables y los inversionistas sólo pueden recuperar su capital y alcanzar beneficios en el largo plazo. El objetivo de la protección comercial es el fortalecimiento del mercado interno para que pueda surgir y crecer un entramado de empresas nacionales. Como lineamiento general, las políticas deben promover la agregación interna de valor.

No obstante, la planificación estatal no debe limitarse a emplear políticas comerciales, sino que tiene que asociarse estratégicamente con los capitales privados, de modo que éstos, como contrapartida, estén obligados a incrementar su productividad -por ejemplo, condicionando la protección del mercado interno al desarrollo de inversiones y mejoras verificables de sus productos y/o procesos fabriles-. Asimismo, bajo la protegida plataforma del mercado interno, se espera que las fábricas puedan incrementar su competitividad aumentando sus economías de escala y de variedad en procesos y productos. Esas fases iniciales comienzan con el crecimiento de sectores industriales de bajos requerimientos de capital y con tecnologías productivas relativamente simples y accesibles. Todos los procesos históricos de desarrollo capitalistas se iniciaron desde la confección textil, cuyo valor agregado proviene mayoritariamente de la mano de obra.

A su vez, el Estado debe proveer a la actividad privada la infraestructura pública necesaria para agilizar la producción doméstica, orientando sus inversiones en áreas de servicios estratégicos para el desarrollo (telecomunicaciones, transporte, energía, por ejemplo). En tanto, a medida que las economías incrementan su actividad productiva y su competitividad, también aumenta la capacidad recaudatoria del sector público. Así, su intervención puede ampliarse y ser más agresiva y sectorializada -por ejemplo, al orientar subsidios y créditos a bajas tasas de interés y de largo plazo hacia áreas estratégicas para el desarrollo que requieran mayor capacidad tecnológica e inversión-. En este sentido, es decisivo contar con una banca pública dedicada exclusivamente a la evaluación de proyectos industriales y su financiamiento.

La estructura tributaria, por su parte, también es central para estimular la actividad productiva brindando condiciones competitivas para la atracción de inversiones. Sobre este punto, se debe dar un tratamiento especial a través de exenciones impositivas a las actividades que requieren más inversión en investigación.

En tanto, un Estado que oriente sus compras a empresas de capital nacional con márgenes de preferencia de precios para pymes también estimula el desarrollo. Por último, el fomento de la inversión externa debe estar dirigido a actividades que necesitan una transferencia de conocimiento, aunque condicionados a su asociación estratégica con capitales nacionales y con exigencias de exportación.

Bajo la lógica descripta, la industria está en condiciones de reducir, paulatinamente, la brecha tecnológica que la separa de los niveles medios de los países más avanzados y lograr la anhelada competitividad internacional.

En grandes rasgos, ése fue el camino recorrido por todas las naciones actualmente desarrolladas y el que ha venido transitando China en los últimos 30 años. De hecho, el mantenimiento de ese *status* demanda que las naciones más avanzadas sigan necesitando una activa participación estatal en sus economías. Desde el estallido de la última crisis internacional, en septiembre de 2008, las naciones desarrolladas anunciaron hasta el año 2010 paquetes extraordinarios de salvataje financiero y promoción de sus economías por un monto de 5,5 billones de dólares, cifra que equivalen al 7,4% del PBI mundial de 2010, según la CIA World Factbook. A pesar de esta evidencia, los portavoces del antidesarrollismo han logrado convencer a los países en vías de desarrollo de lo distorsivos que son los impuestos y de la necesidad de la continua reducción del gasto público. Como se puede apreciar en las siguientes tablas, a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, los pobres tienden a conservar una baja participación estatal en sus mercados y una gran desigualdad entre sus clases sociales.

Desde ya, la alta intervención estatal en la economía no garantiza una equitativa distribución del ingreso (variable esencial del grado de desarrollo de las economías) y viceversa. Sin embargo, se puede observar en la siguiente página una estrecha correlación entre ambas variables.

Cabe aclararse que la medición de la desigualdad se realizó en base al coeficiente Gini, que es parámetro convencionalmente más utilizado para medir el grado de desigualdad de una economía. El mismo es un valor entre 0 y 1; 0 indica la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (un individuo posee todos los ingresos y los demás ninguno).

Ranking de países de mayor intervención estatal en la economía

	País	Gasto Público/PBI (en %) (1)	Coefficiente de Gini (2)
1	Irlanda	66,1	0,29
2	Dinamarca	58,9	0,29
3	Finlandia	56,3	0,27
4	Francia	56,2	0,33
5	Suecia	54,0	0,23
6	Austria	52,9	0,26
7	Bolivia	52,1	0,58
8	Italia	51,4	0,32
9	Reino Unido	51,0	0,34
10	Hungría	49,6	0,25
11	Islandia	48,8	0,28
12	Grecia	48,3	0,33
13	Portugal	47,8	0,39
14	Alemania	46,8	0,27
15	Noruega	46,6	0,25
16	Canadá	46,1	0,32
17	República Checa	46,1	0,26
18	Bélgica	45,4	0,28
19	Estonia	45,4	0,31
20	España	45,1	0,31
21	Israel	45,0	0,39
22	Uruguay	44,0	0,47
23	Estados Unidos	42,2	0,45
24	Japón	40,6	0,38
25	Croacia	40,5	0,29
26	Zimbabue	40,4	0,50
27	Haití	39,4	0,59
28	Ghana	38,8	0,39
29	Sudáfrica	35,6	0,65
30	Australia	35,0	0,31
31	Georgia	34,9	0,41
32	Suiza	34,0	0,34
33	Namibia	33,3	0,71
34	Ecuador	32,2	0,47
35	Jordania	32,1	0,40
36	Yemen	31,1	0,38
37	Nepal	30,4	0,47
38	Colombia	30,0	0,59
39	Irán	29,0	0,45
40	Kenia	27,9	0,43
41	Brasil	27,3	0,57
42	Corea	27,1	0,31
43	México	26,6	0,48
44	Argentina	26,0	0,46
45	Turquía	26,0	0,41
46	Panamá	25,9	0,51
47	Zambia	23,9	0,51
48	Honduras	23,8	0,54
49	Sri Lanka	23,2	0,49
50	Chile	22,6	0,52
51	El Salvador	22,5	0,52
52	China	22,1	0,42
53	Malasia	21,2	0,44
54	Venezuela	19,8	0,41
55	Paraguay	19,8	0,53
56	Costa Rica	19,5	0,48
57	Perú	19,4	0,50
58	India	18,7	0,37
59	Cambodia	18,3	0,43
60	Filipinas	17,7	0,46
61	Hong Kong	17,4	0,53
62	Rep. Dominicana	17,0	0,50
63	Bangladesh	15,9	0,33
64	Guatemala	15,0	0,55

Elaboración propia en base a CIA World Factbook.

(1) En base a datos estimados de 2010 de gasto público y PBI.

Ranking de países de mayor desigualdad distributiva

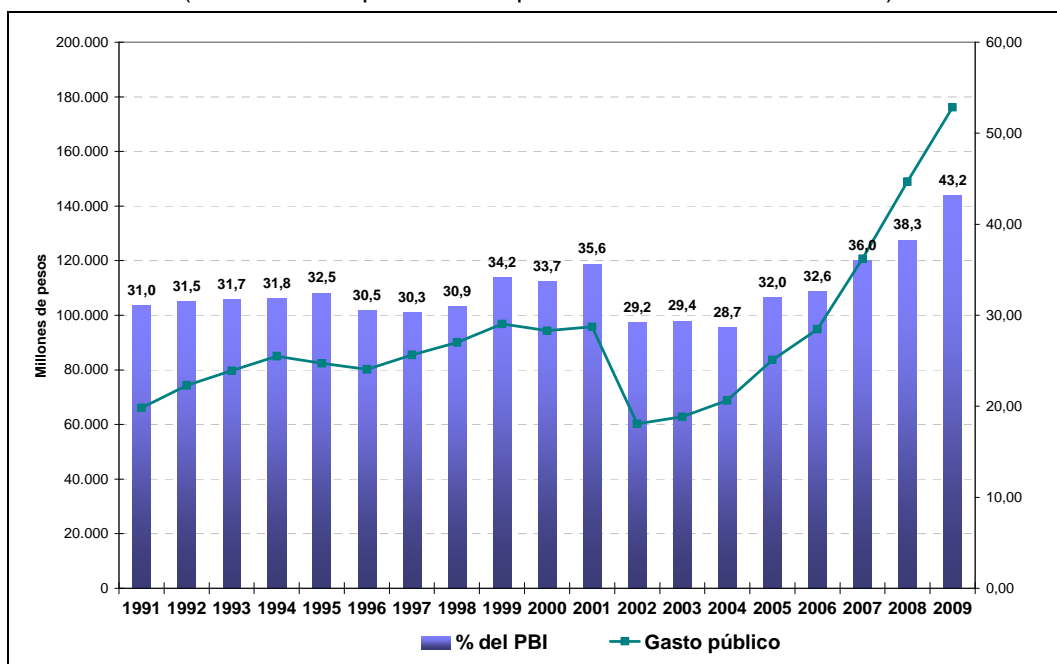
	País	Gasto Público/PBI (en %)	Coefficiente de Gini
1	Namibia	33,3	0,71
2	Sudáfrica	35,6	0,65
3	Haití	39,4	0,59
4	Colombia	30,0	0,59
5	Bolivia	52,1	0,58
6	Brasil	27,3	0,57
7	Guatemala	15,0	0,55
8	Honduras	23,8	0,54
9	Hong Kong	17,4	0,53
10	Paraguay	19,8	0,53
11	Chile	22,6	0,52
12	El Salvador	22,5	0,52
13	Panamá	25,9	0,51
14	Zambia	23,9	0,51
15	Nigeria	14,3	0,51
16	Zimbabue	40,4	0,50
17	Rep. Dominicana	17,0	0,50
18	Perú	19,4	0,50
19	Sri Lanka	23,2	0,49
20	México	26,6	0,48
21	Costa Rica	19,5	0,48
22	Singapur	14,5	0,48
23	Nepal	30,4	0,47
24	Uruguay	44,0	0,47
25	Ecuador	32,2	0,47
26	Filipinas	17,7	0,46
27	Argentina	26,0	0,46
28	Estados Unidos	42,2	0,45
29	Irán	29,0	0,45
30	Malasia	21,2	0,44
31	Cambodia	18,3	0,43
32	Kenia	27,9	0,43
33	China	22,1	0,42
34	Turquía	26,0	0,41
35	Venezuela	19,8	0,41
36	Georgia	34,9	0,41
37	Jordania	32,1	0,40
38	Ghana	38,8	0,39
39	Israel	45,0	0,39
40	Portugal	47,8	0,39
41	Yemen	31,1	0,38
42	Japón	40,6	0,38
43	India	18,7	0,37
44	Reino Unido	51,0	0,34
45	Suiza	34,0	0,34
46	Bangladesh	15,9	0,33
47	Grecia	48,3	0,33
48	Francia	56,2	0,33
49	Canadá	46,1	0,32
50	Italia	51,4	0,32
51	Corea	27,1	0,31
52	Estonia	45,4	0,31
53	España	45,1	0,31
54	Australia	35,0	0,31
55	Irlanda	66,1	0,29
56	Croacia	40,5	0,29
57	Dinamarca	58,9	0,29
58	Bélgica	45,4	0,28
59	Islandia	48,8	0,28
60	Alemania	46,8	0,27
61	Finlandia	56,3	0,27
62	Austria	52,9	0,26
63	República Checa	46,1	0,26
64	Noruega	46,6	0,25

(2) En la mayoría de los casos la información disponible corresponde al último dato informado por la fuente. Los mismos corresponden al período 2000-2010. No obstante, al ser variables estructurales de los países -es decir, son relativamente estables en períodos prolongados de tiempo-, esta insuficiencia en la compilación de los datos no afecta las conclusiones arribadas.

La evidencia empírica demuestra que la elevada intervención estatal representa una condición necesaria para alcanzar y mantener el desarrollo de una economía. En tanto, la condición suficiente para promover el progreso económico es que dicha intervención se articule a una estrategia planificada de desarrollo de una matriz productiva que promueva progresivamente el crecimiento de actividades intensivas en conocimiento.

Ahora bien, es interesante observar el comportamiento del mal llamado gasto público (por su verificada importancia en pos del desarrollo, debiera concebirse como inversión pública) en la Argentina en los últimos veinte años.

Evolución del gasto público y de su participación en el PBI
(Los valores expresados en pesos constantes del año 2001)



Fuente: Ministerio de Economía de la Nación.

Lamentablemente, la fragilidad y el escepticismo respecto a la capacidad del Estado para intervenir en la economía nacional, tras las agudas crisis de fines de las últimas tres décadas del milenio pasado, provocaron que la legitimidad de la intervención, en los últimos años, tenga que estar sujeta al mantenimiento continuo de superávits fiscales y comerciales. No obstante, a partir de 2003, se aprecia un cambio de tendencia, donde la administración pública gana autonomía y participación. De ese modo, se vuelca a estimular a través de diversas políticas un continuo proceso de crecimiento, que permitió la recuperación de la capacidad productiva del país y un aumento de la producción del 65% entre 2003 y 2010.

3. Las relaciones de fuerza y el proceso histórico

Los procesos de desarrollo, como se analizó, en teoría, no deberían ser muy complicados de llevar adelante. Sin embargo, han sido obstaculizados históricamente, a nivel nacional e internacional, por las relaciones de poder que dominan el funcionamiento de las economías.

En efecto, las clases dominantes, en los países periféricos, han tenido el control prácticamente absoluto de las características de la articulación estatal con la

economía. En el mundo, el *statu quo* no se ha podido modificar nunca sin arduos enfrentamientos, como el de la mayor potencia económica global que derivó en un conflicto bélico entre fracciones nacionales que batallaron en su propio territorio a lo largo de un lustro.

Esa dificultad por modificar la realidad explica porqué la dominación de las grandes economías del sistema económico global ha tendido a perpetuarse³. Este fenómeno, sin embargo, no ha sido propiedad exclusiva del capitalismo. Ha llegado al extremo en el sistema esclavista y el feudal, que eclosionaron frente al actual modelo de dominación social, cuyo principal atractivo y fortaleza es el de permitir, bajo determinadas circunstancias, el ascenso social.

Esa mejora de las condiciones de vida ha podido generalizarse en determinados contextos internacionales. Las alianzas de poder con los centros económicos mundiales ha permitido provocar transformaciones estructurales. Este fenómeno se verifica independientemente de los recursos naturales con los que cuentan las economías.

En efecto, países con abundantes recursos naturales, como Canadá y Australia, se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX al amparo del imperio británico del Commonwealth. En cambio, otras naciones, donde esas riquezas de la tierra escaseaban, como en Japón, Corea del Sur y Taiwán, el ascenso se produjo siendo ellos aliados de los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, en todos los casos, operó un mismo fenómeno: se aplicaron programas de fuerte y progresiva intervención estatal en los mercados.

Más allá de la identificación de esos importantes rasgos comunes en los procesos de desarrollo, cada una de las experiencias tiene características particulares. No existe un único camino para afectar las relaciones de poder y avanzar en un proceso de desarrollo. Sin embargo, en todos los casos debemos observar que ha primado la correlación de fuerzas, las luchas de clase, la participación estatal en la economía y el desarrollo de sólidas estructuras industriales.

El antidesarrollismo construyó su legitimidad teórica, ocultando los grupos de poder que se beneficiaban y sus relaciones, preservando la credibilidad de sus ideólogos e impulsores públicos. Sus políticas económicas en las últimas cuatro décadas, caracterizadas públicamente por su extrema valorización de las reglas de mercado como ordenadoras del funcionamiento de la economía, impusieron su discurso en América latina.

Esa estrategia operó, primero, desde la censura y el terrorismo de Estado durante los años setenta. El esquema económico consistía de tres pilares básicos: la desregulación general de los mercados -con énfasis en la apertura comercial y financiera-, la creciente apreciación de la moneda nacional y el endeudamiento crónico con los centros financieros mundiales. De esta forma, la capacidad productiva, principalmente de la industria, mermaba por las dificultades para competir sin barreras arancelarias significativas y con costos internos muy superiores a los estándares internacionales, debido a que el país operaba con una moneda sobrevalorada, sustentada por el ingreso de capitales especulativos.

3 El rol del centro y el de la periferia de la teoría estructuralista de la CEPAL describe las limitaciones señaladas. Para su análisis ver: Prebisch, Raúl, "El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas" (1950), en Revista Desarrollo Económico N° 103, vol. 26, 1986.

El bajo tipo de cambio abarataba las importaciones y encarecía las exportaciones nacionales en el resto del mundo. En este marco, el mercado interno era invadido por los productos del exterior y los altos costos productivos relativos impedían mantener el nivel de ventas a través de la exportación. Así, la industria nacional se achicaba y crecía la exclusión de trabajadores del mercado, tanto como consecuencia del cierre de las fábricas como por estrategias defensivas de incorporar tecnologías ahorradoras de mano de obra. Estos casos eran muy puntuales no sólo porque requerían de una gran capacidad financiera, sino principalmente porque, pese a mejorar la productividad laboral, esa actividad no era tan rentable como los negocios financieros.

Entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, en un contexto de predominio del sistema capitalista y de decadencia del bloque soviético, la debilidad de los gobiernos latinoamericanos como consecuencia de un modelo económico que achicó las capacidades productivas de la región fue rematada por la política de los Estados Unidos de desfinanciar al mundo. La Reserva Federal de ese país captó los flujos de dinero generados a partir de los petrodólares mediante un abrupto aumento de las tasas de interés que pasaron del 5% en 1976 al 16,4% en 1981.

A pesar de que en los siguientes años los países latinoamericanos recuperaban la democracia, la capacidad de planificación estatal estaba muy restringida. Debía conciliar una administración pública degradada con una economía más pequeña, que debía operar con una frágil estructura productiva por la desinversión y destrucción de oficios de los años anteriores.

En particular, la producción de la Argentina, en 1981, cayó un 6,2% y, en 1982, un 5,2% y, además, fue desplazada por las importaciones, que, en el promedio del período 1976/1983, crecieron un 48% respecto al promedio de los años 1968/1976 (a valores constantes de 1968). El modelo eliminó, de este modo, el 35% de los puestos de trabajo de la industria manufacturera.

El principal agravante de ese escenario era la dificultad de los gobiernos de hacer frente al pago de una creciente deuda externa, contraída en los años anteriores por los gobiernos de facto. En estas condiciones, las burocracias de los gobiernos de la época reflejaron su incapacidad para administrar la economía y se degradaron progresivamente las instituciones públicas, afectadas por la escasez de recursos. Es así que los gobiernos, sin crédito externo, debieron recurrir cada vez en mayor medida a la emisión monetaria para financiar sus crecientes déficits públicos.

Este lamentable período finalmente culmina con la simultánea caída del bloque soviético y el mayor proceso hiperinflacionario registrado en la historia de todos los países de la región. Este último fenómeno, sumado a la incapacidad de respuesta de los gobiernos subdesarrollados, desacreditaron del modo más absoluto el rol intervencionista del Estado en la economía, a pesar de que las políticas públicas aplicadas tanto en la posguerra en Latinoamérica como en las tres experiencias de desarrollo de la segunda mitad del siglo XX (Japón, Taiwán y Corea del Sur) habían exhibido su efectividad para mejorar el nivel de vida de la población.

Los cambios en las reglas de juego y los condicionamientos históricos al desarrollo de la región también lograron validar la falaz teoría monetarista y revalidar el protagonismo del dólar como reserva de valor. De esta manera, millones de ahorristas han desconfiado cada vez más de la sustentabilidad del valor de las monedas de sus países y han financiado el descontrolado consumo del mercado estadounidense.

El descrédito de los aparatos burocráticos estatales culminó en los años noventa con la profundización del modelo neoliberal. Las políticas conocidas como de "ajuste

estructural” retomaron las medidas de apertura económica y apreciación cambiaria de los años setenta y derivaron, además, en el remate de los activos nacionales acusados de ineficientes por el discurso dominante de la época.

No obstante, la estrategia antidesarrollista fue mucho más global e interdisciplinaria; actuó, en paralelo, tanto invadiendo la “ciencia económica” (así renombraron a la economía política), como los medios masivos de comunicación y de entretenimiento, la cultura y la administración pública, áreas estratégicamente complementarias para cumplir su misión de alterar los valores, exacerbando el consumismo, y controlar la actividad económica y los recursos de la periferia a través de sus operaciones de desprestigio del rol del Estado.

Lo sorprendente del poder antidesarrollista ha sido, no sólo haber podido ocultar las relaciones de fuerza, sino también el mantenimiento de su legitimidad, a pesar de su impresionante inconsistencia práctica. Esta estrategia se basó, entre otros importantes aspectos, en la construcción de una ciencia económica que universalizó sus análisis mediante una rigurosa matematización, derivada de abstracciones, bajo supuestos simplificadores de la realidad. De ese modo, se logró principalmente librar a la disciplina de su contenido social y político y se abandonó el interés por explicar consistentemente los procesos históricos de cambios estructurales y el rol protagónico de los Estados en la transformación de la economía.

La misión más importante de esta doctrina fue esconder las relaciones de poder entre los distintos actores de la sociedad. Dado que todo proceso de transformación estructural afecta las relaciones establecidas, con posible incidencia tanto en el ámbito nacional como en el internacional, los centros de poder del mundo elaboraron rigurosas teorías que alejaron del análisis los mecanismos referidos a la modificación de esas relaciones en pos del desarrollo.

En cuanto a la explicación de los procesos inflacionarios, dejaron de lado los problemas de distribución de los ingresos y se concentraron, mediante la teoría monetarista, en el análisis del crecimiento de la emisión monetaria. Asimismo, esa teoría tampoco analizó la creciente concentración económica, a pesar de que esos procesos constituyeron una de las principales tendencias del funcionamiento de la economía mundial.

Más allá de las limitaciones que impuso el antidesarrollismo, los gobiernos nacionales desde 2003 han aplicado políticas que permitieron exhibir las relaciones de fuerza existentes en la economía local y han afectado a ciertos sectores de poder, en pos del crecimiento general de la economía.

4. Utilización al máximo de las políticas públicas disponibles

Las secuelas de las políticas antidesarrollistas limitaron los grados de libertad de la política fiscal desde 2003, aunque no fueron lo suficientemente potentes como para detener el proceso de reindustrialización nacional iniciado hace ocho años.

A nivel macroeconómico, las restricciones del modelo antidesarrollista no sólo implicaron tener que afrontar el creciente peso de la deuda externa, sino tener también que enviar permanentemente señales de fortaleza de las cuentas nacionales al mercado. Sin embargo, esa limitante, no imposibilitó al gobierno para que, en el marco de la crisis económica internacional de 2009, promueva el crecimiento de la inversión pública. Esa variable subió un 82,4% respecto a 2008 y logró regular la actividad privada. En efecto, esa inversión, que se materializó principalmente a través de la obra

pública, actuó como amortiguadora de la caída de la inversión privada que, en el primer semestre de 2009 registraba una merma interanual del 13,5%. No obstante el incremento de esas erogaciones en ese año, se logró mantener el superávit primario y, por primera vez en siete años, la expansión de la inversión pública no permitió alcanzar un saldo positivo también a nivel financiero.

La intervención estatal, además de esa inversión contracíclica, incorporó muchas otras políticas que generaron las condiciones básicas para que, en el último trimestre de 2009, ya se registraran los primeros indicadores de reactivación económica, varios meses antes que en el resto del mundo. Entre ellas, se destaca el fortalecimiento del mercado interno a través de medidas complementarias tendientes a la inclusión social y al desarrollo de la capacidad industrial. En este sentido, se aplicaron una coherente administración del tipo de cambio y una política comercial rigurosa a favor de la sustitución de importaciones. A su vez, este proceso fue profundizado mediante la mejora del poder adquisitivo de los estratos más vulnerables de la sociedad. Al respecto, se debe advertir que, desde el fin de la Convertibilidad y hasta 2011, las jubilaciones mínimas se incrementaron de 150 pesos/dólares a 1.300 pesos (equivalentes a 317 dólares), los salarios mínimos pasaron de 200 pesos/dólares a 1.840 pesos (449 dólares), se estableció la Asignación Universal por Hijo y, a través de las moratorias previsionales, más de 2,5 millones de ancianos lograron acceder a la jubilación mínima, a pesar de no contar con los aportes suficientes.

La competitividad de la economía nacional también pudo ser sostenida estratégicamente mediante los subsidios a la energía y al transporte, el Programa de Recuperación Productiva (REPRO⁴) y una política de administración comercial más sofisticada y amplia aún que en los años anteriores.

También fueron muy importantes para mantener el proceso de crecimiento y autonomía de la política económica: el proceso de desendeudamiento –la deuda externa pasó de equivaler, en 2003, a casi un PBI y medio a representar menos de la mitad del PBI actual-; la utilización de reservas de libre disponibilidad del Banco Central para el pago de la deuda, que permitió sortear la aceptación de tasas de interés que hubieran empujado a la economía a una nueva fase del endeudamiento crónico; la recuperación de los fondos previsionales en poder de las AFJP, que permitió promover y extender líneas de crédito subsidiado para el crecimiento de la capacidad productiva industrial.

Estas medidas fueron esenciales para estimular el crecimiento nacional y aislar parcialmente a la economía nacional del desastre económico mundial que comenzó en septiembre de 2008, tras la quiebra de la emblemática financiera estadounidense Lehman Brothers. Más allá de estas consideraciones, un emblema de la antagonía entre los dos últimos modelos económicos (1976-2002 y 2003-2010) del país ha sido la política comercial.

5. Impacto en la inserción internacional de las políticas comerciales

En un mundo donde florecen guerras comerciales y quejas cruzadas, la administración de un tipo de cambio sesgado a las actividades productivas y a los equilibrios macro y microeconómicos, fue el principal pilar en que se apoyaron las medidas comerciales, que explotaron todo el margen de acción permitido por las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

⁴ Los REPRO consistieron en otorgar un subsidio de hasta \$600 por trabajador a las empresas privadas, como condición de mantener su dotación de personal.

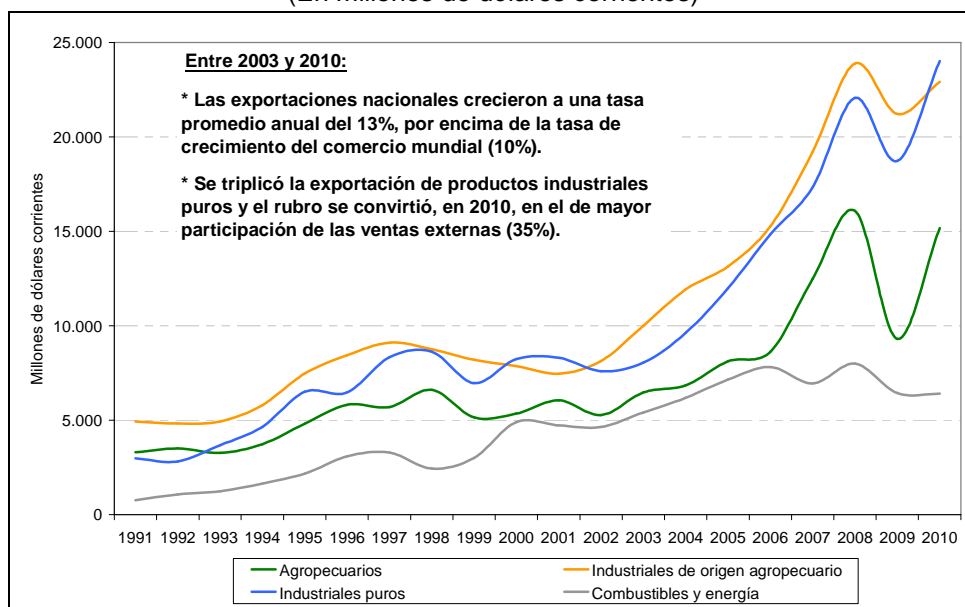
En materia de relaciones económicas internacionales, la política de alianzas regionales de los últimos ocho años constituyó uno de los principales núcleos diferenciales de la estrategia seguida por el gobierno nacional respecto a las políticas empleadas en los años setenta y noventa de sumisión a los intereses de las grandes potencias internacionales. En este sentido, el ex Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, enfrentando a George Bush, lideró la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en 2005, la negativa latinoamericana al ALCA y promovió la estratégica defensa de los intereses regionales a través de la creación de la UNASUR, en la que fue su primer Secretario General. Esta dirección se profundizó con una mayor coordinación macroeconómica entre los miembros del MERCOSUR.

A contramano de las recomendaciones provenientes del pensamiento económico antidesarrollista, fue esencial para poder avanzar en esta política comercial soberana el haber estado relativamente desconectados de los mercados financieros mundiales y haber rechazado los condicionamientos del FMI, tras el pago de la deuda con ese organismo a fines de 2005.

El cúmulo de las políticas aplicadas luego de la gran crisis de la convertibilidad, fomentaron el mayor crecimiento histórico del PBI y de las exportaciones. Ellas ascendieron, entre 2003 y 2010, a una tasa promedio anual del 13%, por encima del ritmo de crecimiento del comercio mundial del período (10%). El principal motor de esa dinámica fueron las ventas al exterior de productos industriales puros que registraron un aumento interanual promedio del 17%.

La “protegida” industria, además de haber nutrido una demanda interna expandida en el referido período, se constituyó en el sector exportador más dinámico (triplicó el monto de sus ventas) y se convirtió, en 2010, en el rubro de mayor participación de los envíos (35%).

Evolución de las exportaciones por rubro (En millones de dólares corrientes)



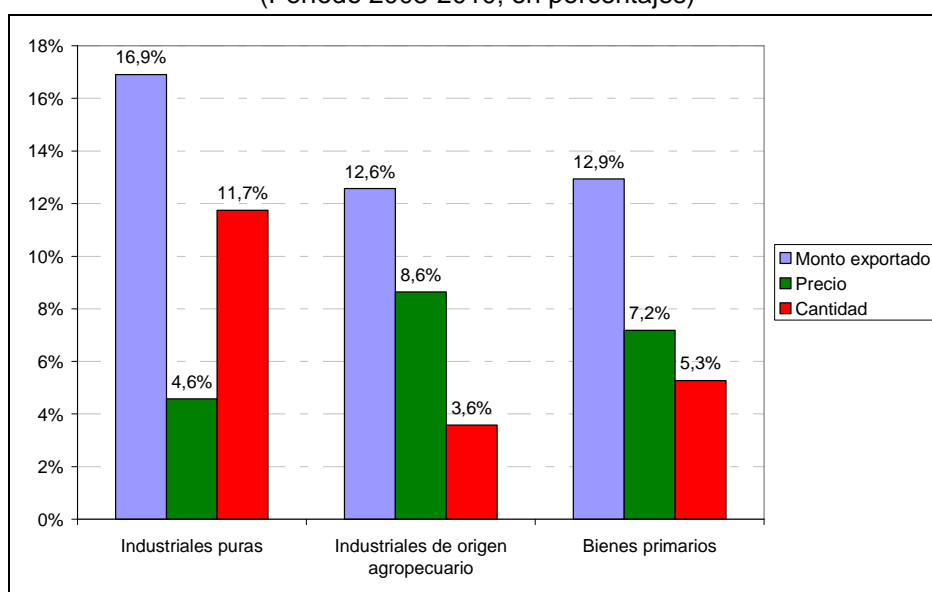
Fuente: INDEC.

El dinamismo del proceso de sustitución de importaciones, que sirvió de plataforma para el crecimiento de las exportaciones, entre 2003 y 2010, permitió reducir la tasa de

desempleo del 20% al 7% y elevar la productividad de los trabajadores industriales en un 23%.

En forma constante, el antidesarrollismo advierte que este camino transformará al país en un paria. Aseguran que está por agotarse un modelo que ha sido sostenible gracias a la exportación del campo, en un contexto favorable por la creciente demanda mundial de alimentos. Sin embargo, superada la sequía del año 2009, las ventas de productos primarios representaron el 22% del total exportado en 2010 y aún no pudieron recuperar plenamente los registros de 2008 -estuvieron un 6% por debajo-. Lamentablemente, la oferta de este importante sector está limitada por la superficie de siembra y por factores exógenos, como las condiciones climáticas y las regulaciones por subsidios, cupos y aranceles, que lo marginan de la gran liberalización mercantil promovida desde la creación del GATT (hoy OMC) en 1947. En efecto, desde 2003, a pesar de los mejores precios internacionales de los bienes de exportación primarios y de las manufacturas de origen agropecuario, las cantidades vendidas al exterior crecieron a una tasa de sólo el 5,3% y el 3,6%, respectivamente. Ello contrasta con el crecimiento de las cantidades exportadas de manufacturas de bienes industriales puros, que, en el referido período, tuvieron un ritmo interanual promedio de crecimiento del 11,7%.

Tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones por rubro según monto, precios y cantidades
(Período 2003-2010; en porcentajes)



Fuente: INDEC.

Ahora bien, si bien la demanda mundial y los precios de estos productos crecen aceleradamente por la expansión de los consumidores -fundamentalmente de China e India- y por los nuevos usos a través del desarrollo de la biotecnología, en la Argentina, está concentrada en pocos países. En efecto, China capta casi tres cuartas partes de las ventas nacionales de porotos de soja. El mayor riesgo de esa concentración de las ventas es estar sometidos a eventuales abusos de poder de mercado como, por ejemplo, cuando pretendieron que el país reconozca a China como “economía de mercado”, en busca de mejores condiciones comerciales generales para colocar sus manufacturas en el mercado nacional.

No obstante, el mayor riesgo es dejarse someter al lobby de quienes manejan el negocio de las ventas al gigante asiático -más del 70% del mercado se concentra en sólo 10 firmas-. Ellos, a través de prédicas injustificadas de supuestas pérdidas de los

mercados internacionales por políticas calificadas como proteccionistas, impregnaron en los medios de comunicación el temor respecto de las eventuales represalias comerciales que, en caso de que se hayan materializado alguna vez, no tuvieron ningún impacto negativo sobre la economía en general y el sector agropecuario en particular. De hecho, el caso de la temporal suspensión de compras por parte de China de aceite de soja es un claro ejemplo de la buena posición de negociación de la Argentina. En esa oportunidad, el efecto de la medida china permitió la diversificación de los destinos de exportación y un aumento del 50% del precio de venta al exterior del producto, desde la negativa de compra de China de mayo de 2010 hasta marzo de 2011.

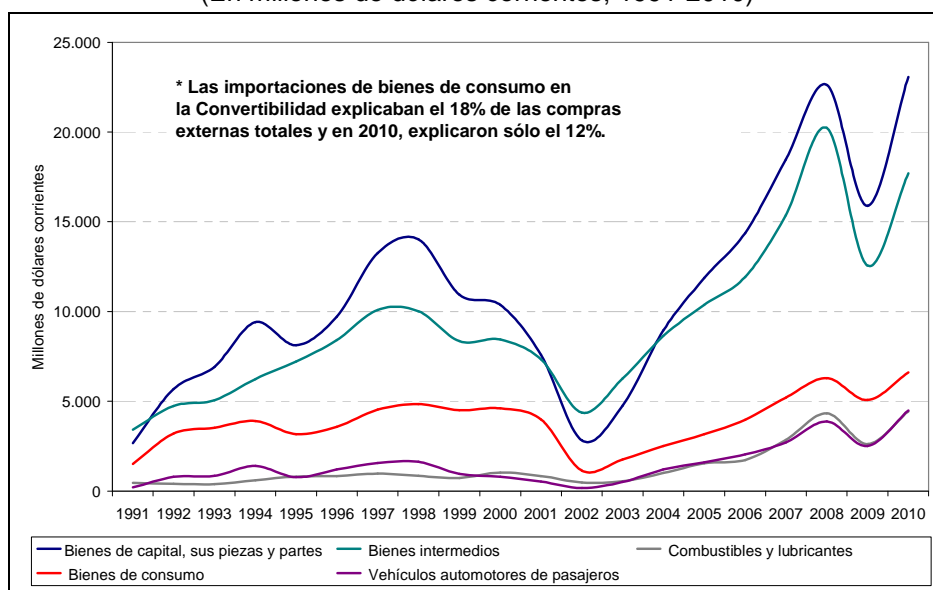
En rigor, la maximización del beneficio de estos grupos concentrados es funcional al mantenimiento de un mercado interno pequeño sin capacidad de intervención estatal. Mientras las operaciones de exportación están sujetas al pago de retenciones y cupos que preservan el abastecimiento del mercado doméstico, la actividad agro exportadora se torna menos rentable. En la medida en que el mercado interno se expande y el gobierno refuerza su poder político para distribuir ingresos hacia sectores de la población más vulnerables y hacia actividades menos competitivas y potencialmente más dinámicas, el poder relativo de los sectores agropecuarios se achica, tanto por la menor renta potencial que pueden acumular como por su menor participación en el creciente ingreso nacional. Este virtuoso proceso se ha logrado sin los recurrentes problemas de déficit de cuenta corriente, lo cual dotó al gobierno de mayor autonomía, dado que no depende de la ágil liquidación de las divisas de exportación por la explotación de los recursos naturales del país para afrontar compromisos de pago de de deuda. En este sentido, también fue vital el achicamiento de la deuda pública que pasó de representar el 166% del PBI en 2002 a sólo el 47% en 2010.

En consecuencia, mientras el grupo concentrado agro exportador no pueda volver a desestabilizar la economía con aumentos de precios en el mercado interno por el mayor control estatal, su objetivo de “liberalizar” sus ventas se tornará más complicado. Desafortunadamente, su lógica de crecimiento individual debe ser cómplice de un Estado ausente, como en los años setenta y noventa. Sólo con una activa participación estatal en la regulación de la economía, Argentina podrá seguir avanzando en una transformación industrial compatible con el crecimiento de un sector con ventajas comparativas estáticas. El bien común no puede estar sujeto a la maximización del beneficio de un sector limitado en su producción por la superficie cultivable del territorio nacional.

Los últimos años los portavoces del antidesarrollismo han anticipado el final del superávit comercial. Como no se cumple su vaticinio, alarman con que la fuga de capitales –un fenómeno cultural también heredado de las políticas antidesarrollistas– será más alta que el saldo de la balanza comercial. Destacan la mejora de los términos de intercambio, pero no dejan de señalar el aumento de las importaciones. Omiten que los rubros que lideraron el avance de las compras externas han sido la maquinaria y los bienes intermedios, básicos en la fase actual del ciclo sustitutivo de importaciones.

Efectivamente, las políticas aplicadas desde 2003 también tuvieron un efecto de cambio estructural en el flujo comercial: provocaron la caída de la participación de las compras externas de bienes de consumo -entre 1991 y 2001, representaban el 18% de las compras y, en 2010, explicaron sólo el 12%-; los 6.612 millones de dólares gastados ese año en el rubro representaron el 1,8% del PBI de 2010.

Evolución de las importaciones por uso económico (En millones de dólares corrientes; 1991-2010)



Fuente: INDEC.

La política de administración de las necesidades de importación de la Argentina, en función de la promoción del proceso de reindustrialización nacional, contrasta fuertemente con las políticas de liberalización comercial de las décadas previas. En la convertibilidad como desde mediados de los setenta, la lógica de la incorporación de bienes de capital en el segmento de bienes transables de la economía operaba, en general, como una estrategia defensiva, sólo aplicable por empresas con suficiente capacidad financiera y que contaban con algún resguardo comercial específico, como en el caso de la industria automotriz, que posee un acuerdo de complementación con Brasil.

Efectivamente, las políticas comerciales aplicadas en los últimos años pusieron de relieve que la inserción en el mercado mundial no es sinónimo de apertura. Se verificó que, como los países desarrollados, que hay que emplear políticas agresivas donde somos más competitivos y proteccionistas, donde necesitamos serlo. Por más ahorro que las empresas consigan al importar desde países que practican difundidamente el dumping y las subvenciones, en lugar de comprar un producto nacional, la diferencia de precio con la industria nacional no se traslada a los consumidores y es mísera en relación a lo que para el país significa en términos de producción y empleo; sólo acrecienta la rentabilidad de unos pocos que operan en el circuito de intermediación.

En rigor, la minimización de los costos para el canal comercial, que hace competir a la industria nacional con economías que no son de mercado, como la de China, produce, primero, una precarización de las condiciones laborales y desempleo y, termina, como ya soportó el país a fines de los años setenta y noventa, con la destrucción de las instituciones, del tejido productivo nacional y con un país empobrecido.

La política nacional de los últimos años reveló los intereses detrás de la imposición de las leyes del mercado como ordenadores de la economía global. A diferencia de ello, se han comenzado a construir las bases de esquema de desarrollo estratégico de las relaciones económicas internacionales, donde prima la defensa del interés nacional para la articulación de alianzas. Esta estrategia de inserción económica global fue condensada por la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner en la Conferencia de la

Unión Industrial Argentina de 2010: **“ya no estamos en un mundo de clientes, vivimos en un mundo de socios”**.

La crítica a la política de relaciones económicas internacionales del país se ha transformado en una figura recurrente, utilizada para exhibir peyorativamente la intervención estatal en la economía. Esas agresiones se han concentrado en detallar la cantidad de instrumentos de protección comercial y reclamos internacionales, aun cuando el poderío de las naciones supuestamente afectadas no se resienta por la política local. Seguramente temen que otras naciones atrasadas se animen a replicar el ejemplo de enfrentar reglas impuestas por el centro de poder mundial que cercenan la capacidad de desarrollo de la periferia.

Los derechos antidumping, los valores criterio, las licencias no automáticas y el resguardo de la industria en las negociaciones internacionales son presentados como medidas aislacionistas o caprichos que afectan la imagen de la nación en el exterior y preservan sectores acusados de no ser capaces de competir. Ese discurso es paradójico y mezquino. La economía nacional, administrada desde 2003 con autonomía, alcanzó, en 2010, un coeficiente de apertura (comercio exterior/PBI) del 34,3% -más del doble que el nivel promedio del período de la Convertibilidad y un 68% más alto que el pico (1997) de los años de oro de las políticas dirigidas por el antidesarrollismo-.

Tras décadas de degradación y vaciamiento de las instituciones nacionales, que derivaron, en 2001-2002, en la peor crisis histórica del país, desde 2003, un modelo sin los recursos multibillonarios de los países centrales y con escaso apoyo político inicial, regulando el tipo de cambio en valores competitivos y con una política comercial que explotó todo el margen de las reglas de la OMC, fortaleció el mercado interno y estimuló a la producción y el empleo.

El antidesarrollismo nada opina del continuo fracaso de las negociaciones internacionales de la OMC, que llevan una década estancadas en la ronda de Doha. Se frustran ante el rechazo del gobierno a la “liberalización” ingenua del comercio. No hay lección que valga, alientan, como en los años setenta y los noventa, que se bajen más los aranceles a la importación, a pesar de que la alícuota promedio efectiva ya sea de sólo el 11%. No analizan los procesos históricos ni factores geopolíticos que puedan explicar el gran desequilibrio entre la protección de la producción industrial y la agrícola.

Las prédicas del antidesarrollismo trascienden la esfera comercial y económica, invaden todos los terrenos de la vida pública. Más allá de que esa doctrina haya logrado impregnar sus ideas en la academia y en la prensa, se ha generado un importante grupo de estudiantes, profesionales y funcionarios del gobierno que, defendiendo el interés nacional, las seguirá descubriendo y combatiendo desde el rigor de los hechos.

6. Conclusiones

El antidesarrollismo ha atacado cualquier intento de progreso en América latina. Busca generar pesimismo y frustración. Sus técnicos se muestran ideológicamente puros y libres de alianzas de poder. Tratan de preservar el *statu quo*. Aseguran que la estabilidad jurídica es el motor de la inversión y sobrevaloran las de capitales extranjeros. Confían en los mercados para administrar los recursos. Reniegan de la intervención del Estado. Sus leyes son pretendidamente científicas y universales. El

hecho de no poder exhibir ningún caso de desarrollo bajo sus condiciones no los amedrenta para imbuir a la academia de sus contrasentidos.

A diferencia de las políticas aplicadas desde mediados de los años setenta, las medidas tomadas a partir de 2003, han revelado los principales rasgos orgánicos del antidesarrollismo en el país y los actores de poder involucrados en esa disputa. Profundizando en el análisis de la economía global, se podrá apreciar que el logro más importante de las políticas kirchneristas ha sido recuperar bastiones de soberanía nacional afectados por el antidesarrollismo. El éxito del modelo también se exhibe en el fortalecimiento del mercado interno, en la creciente administración de los recursos nacionales, en el proceso de desendeudamiento, en las reivindicaciones del patrimonio cultural y de los derechos humanos, en los mayores recursos para la educación, la ciencia y la tecnología y en la sólida reconstitución de los lazos de apoyo estratégicos con el resto de los países América del Sur a través de la UNASUR.

El antidesarrollismo ha logrado esconder la vital relevancia de las relaciones de poder y las alianzas, esenciales en cualquier intento de desarrollo; por más que las políticas tengan un impacto positivo en el ingreso presente y futuro de la sociedad, la historia demuestra que se deben conciliar e inclusive combatir diferentes tipos de intereses preexistentes. Desde mediados de los años setenta y hasta la crisis de 1998-2002, no se practicó ninguna medida para avanzar en ese sentido. La ciencia económica fue un instrumento clave, ya que no preparó al economista para el más importante desafío real: alterar relaciones de fuerza que generen cambios estructurales y, a la vez, promuevan el desarrollo.

Esta introducción al antidesarrollismo forma parte de un trabajo que pretende ser mucho más amplio y representa un esfuerzo por convocar al pensamiento y al debate, desde la perspectiva histórica y del análisis de los principales rasgos estructurales actuales del funcionamiento del sistema mundial. En esta tarea será necesario identificar, en un sentido global, las relaciones de fuerza involucradas en cada período histórico, los grupos sociales afectados y beneficiados por las políticas aplicadas en cada país y su eventual impacto en otras naciones.

La tarea será continuar desenmascarando los intereses detrás de los mecanismos de legitimación de las políticas antidesarrollistas. Esa labor sólo puede ser efectiva desde el análisis crítico de las teorías que dominaron la escena en los distintos contextos históricos, políticos y sociales de la historia mundial a favor de algún grupo establecido de poder. Identificar al sector que influye en sus teorías y los instrumentos que utiliza, contrastados bajo el rigor de los hechos, debe guiar las investigaciones que promuevan el desarrollo.

Un trabajo de esas características sólo puede ser realizado a través de una capacidad intelectual liberada del encierro impuesto a la iniciativa creativa de las teorías antidesarrollistas. Hay que trabajar en la concientización de nuestra sociedad y exhibir la realidad de las relaciones de poder que han atacado en toda época el desarrollo de las zonas dominadas.

Hasta ahora, la estrategia del gobierno nacional no ha sido ingenua, actuó sobre ciertos espacios de poder críticos y soportó con éxito los intentos desestabilizadores. Avanzar por todo simultáneamente provocará el caos. Sobre la base de nuestras riquezas materiales e intelectuales y los nuevos sistemas de comunicación, deberemos capitalizar esta oportunidad histórica y construir, sin mezquindades, un plan de desarrollo estratégico que sostenga el actual proceso de crecimiento con inclusión social.

7. Bibliografía

- Aguilar, Alonso, "Refutación a teorías sobre el desarrollo". En Desarrollo y Desarrollismo. Editorial Galerna, 1969.
- Argumedo, Alcira, "Los silencios y las voces en América Latina", Ediciones del Pensamiento Nacional, 1993.
- Aronskind, Ricardo, "Controversias y debates en el pensamiento económico argentino", Editorial: Instituto del Desarrollo Humano - coedición UNGS - Biblioteca Nacional, 2008.
- Chang, Ha-Joon, "¿Qué fue del Buen Samaritano? Naciones ricas, políticas pobres", Asociación de Economía para el Desarrollo y la Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2009.
- Evans, Peter, "El Estado como problema y solución". en Desarrollo Económico Vol. 35, N° 140, Buenos Aires, 1996.
- Frascina, Juan Santiago, "Causas y consecuencias del fin de la convertibilidad", Colección Economía Nacional y Popular. Ediciones Cooperativas, 2009.
- Hobsbawm, Eric J., "Historia del Siglo XX", Barcelona, Ariel, 1995.
- Hobsbawm, Eric J., "Industria e Imperio", Barcelona, Ariel, 1989.
- Marx, Karl, "El Capital". Traducción de Juan B. Justo, edición 1928. Buenos Aires, 1928.
- Prebisch, Raúl, "El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas" (1950), en Revista Desarrollo Económico N° 103, vol. 26, 1986.
- Rapoport, Mario, "Historia Política, Económica y Social de la Argentina (1880-2000)". Buenos Aires. Editorial Macchi, 2000.
- Schvarzer, Jorge, "La Industria que Supimos Conseguir", Ediciones Cooperativas, 2000.